



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandado:** JESUALDO ALONSO DURÁN URBINA  
**Demandado:** COLPENSIONES y OTROS  
**Procedencia:** JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 74  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-015-2022-00062-01 (O2-23-042)

En Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**, y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada, así como el grado jurisdiccional de consulta en su favor, dentro del proceso ordinario instaurado por **JESUALDO ALONSO DURÁN URBINA** en contra de **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.**, proceso con radicado n.º 05001-31-05-015-2022-00062-01 (O2-23-042).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

### 1. ANTECEDENTES

Mediante vocero judicial, el litigioso por activa **JESUALDO ALONSO DURÁN URBINA** pretende la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, y de consiguiente, la reactivación de la afiliación en Colpensiones, la devolución de sus cotizaciones, rendimientos, y las costas del proceso, en cuyo sustento fáctico señaló que nació el 8 de diciembre de 1966, se afilió a los seguros de IVM en el año 1989, luego de lo cual se trasladó al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A., en agosto de 1996; que dicho traslado de régimen se dio por intermedio del área de talento humano de la empresa donde laboraba, sin que se brindara información y asesoría para su traslado; y que solicitó a

COLPENSIONES el traslado de régimen el día 1° de febrero de 2022, el cual fue denegado mediante comunicado del 2 de febrero de 2022.

### **1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La demanda fue admitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 30 de marzo de 2022 (doc. 2), con el cual ordenó su notificación y traslado al extremo litigioso por pasiva.

Seguido a su notificación (doc. 7), COLPENSIONES contestó la demanda por intermedio de gestor judicial el 25 de abril de 2022 (doc. 8), oponiéndose a las pretensiones incoadas, por cuanto a su parecer carecen de fundamento legal y fáctico. En su defensa, propuso como medios exceptivos de mérito los que designó: inexistencia de nulidad en el traslado de régimen, saneamiento de la nulidad relativa, imposibilidad de condena por intereses moratorios, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, una vez notificado (doc. 12), PORVENIR S.A. dio contestación a la demanda a través de apoderada judicial el 20 de octubre de 2022 (doc. 10), la que se opuso a las pretensiones formuladas, toda vez que la afiliación al RAIS fue completamente válida, precedida por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, además de que no se aporta prueba que su traslado se dio bajo algún vicio del consentimiento o falta de información, a la vez de proponer las excepciones de mérito que rotuló: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido, buena fe y compensación.

### **1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 (doc. 17 y 18), con la que la cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS, al tiempo de condenar a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, las sumas que se encuentre en la cuenta de ahorro individual del demandado con sus respectivas cotizaciones y rendimientos. Así, como condenó a COLPENSIONES a recibir dichos rubros y a tener como afiliada a la demandante en forma permanente y sin solución de continuidad, gravando en costas y agencias en derecho a la AFP PORVENIR S.A., y a favor del demandante.

### **1.3 APELACIÓN**

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por el apoderado judicial de COLPENSIONES, en cuyo sustento sostuvo que no puede aplicarse la nulidad al acto de traslado, porque la parte demandante es una persona completamente capaz para celebrar contratos que produzcan plenos efectos jurídicos y la decisión tomada se dio de manera libre, consciente y sin presión alguna que pudiera derivar en un vicio del consentimiento. Explica que no es razonable jurídicamente imponer otras obligaciones, a partir de soportes o pruebas que no están previstas, y sobre la obligación de aceptar la vinculación del régimen de prima media del demandante alega que debe considerarse que en los casos de ineficacia o nulidad por falta de información de la AFP, se están endosando las consecuencias finales a la administradora de prima media respecto a situaciones ajenas a su responsabilidad, a más de que a su criterio, la condena vulnera el sistema de libre competencia entre regímenes y desconoce la obligación constitucional de proteger y garantizar la sostenibilidad del sistema general de pensiones.

### **1.4. CONSULTA**

Por haber sido la decisión objeto de apelación por COLPENSIONES, y desfavorable a los intereses de la entidad, se analizará integralmente la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

### **1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, el apoderado judicial del demandado, aportó memorial con el que asienta que, la carga de la prueba está en cabeza de los fondos privados de pensiones y que el formulario de afiliación no es válido para demostrar que se cumplió con el deber de información. Además, sostiene que no se requiere tener un beneficio de transición para que proceda la ineficacia del traslado de régimen de pensiones, pues el deber de información aplica para todos.

Por su parte, el apoderado judicial de COLPENSIONES, adosó escrito de alegatos de conclusión, con el que asienta que deberá acreditarse imperiosamente que la AFP a la que se afilió incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, esto es, brindarle información adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio de libertad informada.

Finalmente, la apoderada judicial de PORVENIR S.A., alegó de conclusión en segunda instancia que los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica y dichos descuentos han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, por lo que no se pueden retrotraer la cobertura y el servicio ya prestado, lo que atenta contra toda lógica jurídica y causa un enriquecimiento sin justa causa.

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública accionada, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES en todo lo que no fue materia de apelación, para lo cual se plantea para su estudio los siguientes:

### 2.1 PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en la presente Litis se circunscribe en definir: ¿Si procede la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional del demandado al régimen de ahorro individual con solidaridad?, y en caso afirmativo, ¿Cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la ineficacia del traslado?

### 2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, siguiendo la tesis de que no se brindó la asesoría cualificada que pregonaba el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero habrá de **revocarse** en cuanto a la absolución impartida por el traslado de cuotas de administración, lo cual implica que deba modificarse la decisión en punto a ordenar el traslado de lo descontado por este rubro y además por primas del seguro previsional y aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, de manera indexada, atendiendo a las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

### 2.2.1 Ineficacia del traslado del RPM al RAIS

En lo que interesa a la litis, no es objeto de discusión que el accionante nació el 8 de diciembre de 1966 (doc. 1 pág. 25), que venía afiliado a los riesgos de IVM administrado por el extinto ISS, hoy COLPENSIONES desde el 13 de julio de 1995 (doc. 8 pág. 42); que no es beneficiario del régimen de transición por edad (doc. 1 pág. 25), ni por tiempo de servicio (doc. 8 pág. 42); que se afilió al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A., el **30 de agosto de 1996** (doc. 10 pág. 104); y que solicitó su traslado a COLPENSIONES el 1° de febrero del 2022 (doc. 1 pág. 26), mismo que le fue denegado mediante comunicado del 2 de febrero de 2022 (doc. 1 pág. 33).

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL2229-2022, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor del afiliado como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próximo o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es relieves por la Sala que para la fecha del traslado de régimen pensional el 30 de agosto de 1996, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1217-2021, consiste en: *“ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, se allegó el correspondiente formulario de afiliación (doc. 10, pág. 104), mismo que no fue tachado ni desconocido por el actor, empero, tal probanza no refleja que se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta explicar los beneficios y características de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, de cuya explicitud no hay prueba alguna, previo al momento de efectuarse el traslado o a la sazón de este.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que si la AFP demandada no cuenta con ningún soporte documental para la fecha del traslado de régimen, al brindarle al actor información únicamente de manera verbal, y en tal circunstancia se entrevé una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegarse un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que indica la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala del traslado de régimen, ilustrando al interesado sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, apercibiendo a el promotor del juicio de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debía efectuar aportes voluntarios adicionales o extraordinarios a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de vejez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarios por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, puesto que *in fine* la asesoría no debe estar encaminada a persuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe orientarse también a que el afiliado pueda lograr la prestación económica que mejor se acompañe con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

Ahora, si bien el litigioso por activo de la relación procesal acepta en el interrogatorio que suscribió el formulario (min. 16:40), no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión del afiliado haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, puesto que, por el contrario, el accionante enfatizó que no se le brindó ninguna asesoría y que únicamente le indicaron que el ISS se encontraba en riesgo (min.16:51), pero sin expresarle cuáles eran las características puntuales y comparativas del RAIS y del RPMPD, ni las posibles desventajas de su traslado de régimen pensional.

En lo concerniente a las re-asesorías, esta Sala ha sido del criterio de que las mismas no convalidan el acto jurídico írrito del traslado, por manera que, aún bajo el supuesto de que el 16 de diciembre de 2021 la AFP le hubiere calculado su probable mesada pensional en el RAIS (doc. 10 pág. 112 y ss.); ello no podría, *per se*, tener la virtualidad de subsanar o convalidar las falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: *“la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”* (SL1688 de 2019).

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió y trasladó el pretensor, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió a él litigioso por activo cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el extremo litigioso activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción del demandado frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que el afiliado no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

De igual forma, en el mismo precedente judicial en cita, la Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del status quo, indicando que: *“a diferencia de*

*algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”.*

Así pues, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este aspecto, en cuanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional.

### **2.2.2 Traslado de las cotizaciones**

A este respecto, es preciso indicar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias como las SL31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, al tiempo que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad sea un tercero la imposibilite para recibir los aportes, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con prestación definida, y atendiendo a que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 los dos regímenes de pensiones si bien coexisten son excluyentes, y por tanto, una vez declarada la ineficacia del traslado en el RAIS, consiguientemente la AFP deberá devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, independientemente de si el actor estuvo afiliado al ISS con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan los apartes pertinentes:

*“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;*

*ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que el demandado permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.*



*iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”*

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y las sumas de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, habida cuenta que a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido detraídos por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

Conforme a lo dicho, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todos los valores obrantes en la cuenta de ahorro individual de la parte actora, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la plena realización del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no pasa por alto esta Sala la existencia de un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en sentido contrario, es del caso precisar que el mismo se refiere a los traslados a instancia del afiliado y no merced a la declaratoria de ineficacia del traslado pensional, y que en últimas, tal acto no es de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, allende que, la Sala se aviene a línea jurisprudencial que en derredor del tema ha venido desarrollando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como quedó dicho *in extenso* en líneas anteriores.

En lo concerniente con la indexación de las partidas descontadas sujetas a traslado, cumple señalar que esta Sala modula su postura anterior, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, vale decir, no fue materia de debate en el presente proceso,

debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto que ello no se traduce en una condena sino sólo es el reconocimiento de los efectos de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos y por el paso del tiempo, pero únicamente respecto de los descuentos por devolver, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Como corolario de lo expuesto, se impone para la Sala confirmar la sentencia de primer grado, en cuanto con acierto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional verificada el 30 de agosto de 1996 a la AFP PORVENIR S.A., al tiempo de revocar la absolución por concepto del traslado de cuotas de administración, para ordenar el traslado de lo descontado por gastos o comisión de administración, primas del seguro previsional y aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, descuentos que deberán devolverse de manera indexada.

### **2.2.3 Excepción de prescripción**

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que *“a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria”* (SL1465-2021), a más de que esta Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias que trae la declaratoria de la ineficacia se traducen en el imperativo traslado de las aportaciones de manera íntegra, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización y estructuración de la fuente financiera del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, como así lo decantó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

### **2.3. COSTAS**

Sin costas en esta instancia, toda vez que, si bien la entidad pública propuso el recurso de apelación, lo cierto es que la sentencia se analizó en su integridad en favor de COLPENSIONES, en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

Las infligidas en primera instancia, se confirman, toda vez que no fueron materia de apelación.

### 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: MODIFICAR** el numeral **SEGUNDO** de la sentencia materia de apelación y de consulta proferida el 3 de febrero de 2023 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará en los siguientes términos:

*“**SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A.** a devolver o trasladar a COLPENSIONES todos los valores, recursos o sumas que hubiere recibido con motivo de afiliación y traslado de JESUALDO ALONSO DURÁN URBINA, como cotizaciones con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con todos los rendimientos que se hubieren causado, así como lo descontado por gastos o comisión de administración, por sumas adicionales de la aseguradora (seguro previsional), y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, por el tiempo que el demandante estuvo afiliado a dicha AFP, descuentos que deberán ser devueltos debidamente indexados, de conformidad con la parte motiva de este fallo.”*

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás, la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta.


**TERCERO: SIN COSTAS** en esta instancia. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiénose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

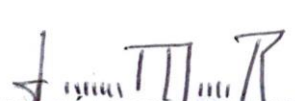
**Comuníquese, notifíquese y cúmplase.**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente



**CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES**  
Magistrado



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario